

CONTRADICCIONES

A cada paso, el Gobierno se encuentra con una contradicción que se hace continua: mantener una credibilidad política en su deseo de una reforma que conduzca al país hacia un sistema identificable con los de las democracias europeas entre las que quiere figurar, y mantener los esquemas de comportamiento autocrático que desean partes importantes del poder y a los que autorizan las leyes actuales. Se dice insistentemente para justificar esas contradicciones que estamos en una época "de transición"; pero no se ven razones válidas por las cuales esa transición no se haga más con arreglo al futuro que se supone que se quiere establecer que a un pasado que no cesa.

LA credibilidad del Gobierno había aumentado en la última semana con las oportunas declaraciones de su vicepresidente primero, teniente general Gutiérrez Mellado, que tuvieron incluso la virtud de hacer subir la Bolsa, al dar al asustado capital una seguridad visible: la de que el camino de la "reforma" estaba respaldado. Y había aumentado con el impacto del viaje político del Jefe del Estado a Francia, como signo de la rotura de una serie de premisas y contenciosos en la aproximación a las democracias clásicas en contra de los elementos más retrasados del Régimen. Se rompe, en cambio, en cuanto a comportamiento frente a una huelga importante, como lo es la de los transportes de superficie en Madrid. Parece ya claro que los miembros del Gobierno no tienen los reflejos hechos a estos percances en la vida democrática de cualquier país. Lo demostró ya con la huelga de Correos, en la que tuvo la peregrina idea de llamar equipos de voluntarios. Reitera ahora su falta de temple al enfrentar a la Fuerza Pública contra los huelguistas, al negarse al diálogo con los representantes reales de estos huelguistas, al no dar ocasión de que se expresen realmente cuáles son las circunstancias en que se ha decidido la huelga y cuáles las razones que asisten o pueden asistir a estos obreros para lanzarse al paro. Por el contrario, en las declaraciones del director de la empresa se dijo, como es costumbre, que la huelga obedece a motivos "extralaborales". En este tipo de manifestaciones es donde comienza ya a perderse la credibilidad. Incluso con una clara tendencia a dar razones a los enemigos de la misma "reforma" que está patrocinando al Gobierno: aquellos que utilizan todos los pretextos para indicar que una democratización vaya a conducir al país al caos, y a los que preconizan el regreso a la manera fuerte para implantar el "orden" en la vida ciudadana.

SE ha dicho repetidas veces —y se ha dicho en estas mismas páginas— que la huelga es algo indeseable, que perturba la vida pública y la economía de todos —sobre todo, en los países donde la economía es de todos—; se ha dicho también que es una tragedia a partir del trabajador mismo que tiene que acudir a esa arma, sobre todo en países donde, como el nuestro, no hay cajas sindicales de resistencia, las huelgas son ilegales y los huelguistas pueden ser reprimidos por la Policía, despedidos, encarcelados. Pero la huelga es, al mismo tiempo, un derecho reconocido en los países occidentales de corte democrático, por una razón determinada: porque no se ha creado todavía un organismo de armonía suficiente para eliminar los conflictos entre el capital y el trabajo. En España se soñó que se había creado ese organismo por medio de los sindicatos verticales. Se ha demostrado ya hasta la saciedad que no es así. Se trata de entrar tímidamente en un sistema sindical clásico, pero no se acaba de decidir. Entre tanto, desprestigiados los sindicatos verticales por el propio Gobierno y no aceptada la legalidad de los otros, el país está sin un mecanismo sindical apropiado para mitigar estos conflictos. La huelga sigue siendo ilegal. Lo cual no impide que exista. Los organismos afectados siguen sosteniendo como dogma el "principio de autoridad" y el de no tratar con comisiones o delegaciones que no sean verticales: los conflictos se endurecen. Cierto que el Gobierno ha renunciado —hasta ahora— a su arma clásica de la militarización del personal en

huelga, y ha adoptado la correcta solución de habilitar líneas de transporte encargadas al personal militar, para paliar los efectos del problema sobre toda la vida madrileña. Pero no va al fondo de la cuestión, ni parece admitirlo: el real malestar laboral de los operarios de la EMT.

NO son estas las únicas faltas de credibilidad efectiva que el Gobierno está dando en su comportamiento. Las detenciones menudean, se van haciendo cada vez más numerosas —con respecto a etapas anteriores—, la falta de interés por negociar con la oposición democrática es manifiesta; mientras que, por el contrario, los acuerdos con la oposición autocrática se hacen patentes. Mientras la Policía se hacía presente en una reunión interna de Coordinación Democrática —sin interrumpirla y sin impedirle, pero recordando con su presencia que en cualquier momento se puede declarar ilegal—, el Gobierno concertaba con la Alianza Popular una serie de enmiendas posibles a su proyecto de Ley de reforma; enmiendas que alejan más al proyecto de un carácter democrático real y se asemejan a la democracia orgánica que iba a ser superada. Cierto que el Gobierno busca el pacto con aquellas fuerzas que tienen representación en las Cortes, que han de debatir su proyecto en las Cortes, que con las que están fuera y carecen de todo medio de presión que no pueda ser denominado como subversivo. Pero precisamente esta irregularidad es la que tendría que reformarse para que hubiera, realmente, reforma.

EN cuanto al comportamiento del Gobierno en las posibles elecciones legislativas que se decidan tan unilateralmente, podría tenerse ya una muestra por lo que se está preparando para el referéndum —que, hasta ahora, no ha traslucido su verdadero contenido—. Se asegura ya que su presupuesto es de 1.200 millones de pesetas, y que una tercera parte de este presupuesto sería destinado a propaganda. A propaganda, naturalmente, del "Sí". Suponiendo que las otras dos partes estuvieran justificadas por los gastos naturales de la votación, quedaría esta enorme cifra de cuatrocientos millones de pesetas para propaganda y relaciones públicas, que habremos de pagar todos los contribuyentes, incluyendo desde luego a los que puedan ser decididos partidarios del "no". Al parecer, alguna de las agencias de publicidad a las que se había encargado la campaña del referéndum ha declinado la oferta, aun suponiéndole un ingreso considerable, por razones éticas. Está claro que ninguna fuerza política que decida la negación a las



SOMOS
UNA INSTANCIA
UNITARIA
DE DESTINO
EN LO
UNIVERSAL



preguntas del referéndum puede contrarrestar esa propaganda.

PARECE que la idea general del Gobierno es la de presentar a la oposición democrática una serie de hechos consumados que defenderá con toda la fuerza a su alcance —y ya sabemos que es mucha—, obligándola simplemente a este dilema sin negociación: o bien acepta esta democracia mixta y vaga con la esperanza de poder llegar a verdaderas reformas dentro de ella, o bien se sitúa definitivamente en el margen y en la ilegalidad. El ala moderada de la oposición democrática vacila en la disyuntiva. Optaría por una resignación. Otra parte de la oposición democrática prefiere aceptar el desafío, en la idea de que el Gobierno no podrá dar nunca el aspecto democrático que desea a su reforma si no pacta con los partidos políticos democráticos y de izquierdas.

NO hay, hasta ahora, signos visibles de que el Gobierno quiera o pueda aceptar este último punto de vista. Es mucho más sensible a las presiones de la oposición autocrática, de cuyo costado ha nacido y con la que tiene muchos más puntos de identificación. Es difícil negar realismo a esa postura gubernamental, aunque se le pueda negar sinceridad con arreglo a sus propias declaraciones interiores y exteriores. Pacta con quienes la fuerza visible, desdeña a quienes no parecen tenerla.

PERO, mirando más allá, falta el verdadero realismo histórico, aunque lo haga coyuntural. En su concepción de lo posible, el Gobierno olvida o no puede tener en cuenta el fondo nacional como el que pretende un nuevo y mejor reparto de la riqueza, una equiparación de sus libertades humanas a las de los países con los que el Gobierno pretendería homologarse, y como están descriptos en las convenciones de derechos humanos que el Gobierno suscribe con tanta ufanía, un modo y un estilo de vida que sólo son relacionables con la democracia. Mientras sean solamente una realidad de fuerzas y presiones, estarán trabajando para lo coyuntural; cuando ausculten el fondo real del país, trabajarán por la comunidad en el sentido que requiere el presente. Dejarán perder su gran ocasión histórica. ■

La Falange rota

EL "mitin de la Comedia", el 29 de octubre de 1933, convocó quizá algunos aventureros, algunos marginados, algunos residuos de una sociedad que estaba tratando de cambiar a España. Convocó también muchas gentes de buena fe. Gentes que, llevadas de unas doctrinas que encendían Europa, creían que España podría encontrar un camino por una vía que les pareció nueva. El ensueño del 29 de octubre no alcanzó grandes mayorías. Falange era un partido minoritario, aun con la suma de las JONS. Era el partido, sin embargo, que iba a dar doctrina de la suya propia a lo que después se llamó el Movimiento. Si Falange hubiese administrado su afiliación, si hubiera hecho difícil tener el carnet rojo y negro, hubiera podido conservar su esencia. Se dejó llevar por el aluvión de afiliados que, a partir de la guerra, iba a presentarse en sus oficinas. Fue sobre todo entonces cuando el montón de aventureros, de gentes que buscaban una seguridad política, de ignorantes absolutos de lo que podía ser la doctrina de un partido que se había convertido de pronto en partido único, con la adopción de otros que eran no solamente ajenos a su doctrina y a su pensamiento, sino psicológicamente enemigos, se desnaturalizó definitivamente. La doctrina de Falange —el sueño del 29 de octubre— era ya entonces inviable: estaba desconectada de la realidad. Las adiciones, el aluvión, la utilización, la digestión que se hizo de todo ello, terminó de destrozarla. Falange Española —ya Tradicionalista, ya de las JONS— se vio privada de sus fundadores, se vio acusada de paseos y asesinatos: de sus filas salieron desaprensivos que caminaban únicamente hacia el gran dinero.

El estallido de Falange, este último 29 de octubre —por primera vez sin carácter oficial—, el aniversario, estaba programado desde su desnaturalización en la guerra civil. Falange no fue capaz de resistir su estancia en el poder; menos aún ha podido resistir lo que se inicia como un paso a la oposición. En un mundo donde ya las ideas dominantes en

la Europa de 1933 están desprestigiadas y vencidas —se busca el poder por los mismos grupos siguiendo otros caminos, otro vocabulario, otros disfraces—, los residuos de una Falange que fue y todavía es opulenta se destrozan entre sí. "¡Aquí se han infiltrado comunistas!", se oía decir mientras los camaradas se agredían unos a otros, mientras el "Cara al Sol" no unía, sino que disgregaba, mientras los "grandes" de la derecha, que quieren seguir utilizando permanentemente la fuerza de estructura que hay todavía en el esqueleto autoritario del Estado español, abandonaban la sala. El grito eterno, el grito de espaldas a la realidad: aquí se han infiltrado comunistas... Era la justificación que lanzaban quienes todavía querían creer que el sueño de 1933 estaba en pie.

Para muchos habrá sido un espectáculo agradable. Algún periódico, y no precisamente de la izquierda, sino de aquellos que utilizaron a la Falange para cabalgar sobre sus muertos y sobre sus ideas, lo ha destacado con una malevolencia visible. Para otros muchos, el ver apalearse entre sí a los que hacen descender de sus apaleadores de antaño, es como una venganza histórica. Una ratificación de que merecía la pena haber sobrevivido, aunque haya sido a costa de tanto esfuerzo y de tanto sufrimiento. ■



El mitin conmemorativo del cuadragésimo tercer aniversario de la fundación de la Falange acabó en tumulto: los camaradas llegaron a las manos durante la intervención de Sigfredo Hillers.